La crisis que azota Andalucía desde hace ya más de seis años se veía venir desde hace años, al menos por algunos (y no pocos), que incluso advertían en los foros que podían sobre la que se nos avecinaba. Bien es verdad que la realidad vivida, y que aún nos va a hacer sufrir por algunos años más, ha sido mucho más dura de lo que se pensaba y que tampoco se sabía el motivo que iba a provocar el estallido; eso hubiera sido cosa de adivinos y no de analistas de la realidad. En este documento tan antiguo como elaborado en 1997 se decían cosas que se han ido manifestando con posterioridad a esa fecha y se daban pautas de actuación para tratar de enfrentarse a los retos que entonces tenía Andalucía por delante; éstos son, por desgracia, los mismos que entonces y agrandados, lo que significa que se ha hecho muy poco o nada desde entonces por ponerse al día. Mientras trabajamos en otro documento actualizado, no está de más dejar constancia de todo lo anterior con la publicación de este documento. Como la Asamblea Civil por Andalucía ya no existe, solo queda por decir que se trataba de una reunión de andaluces (y andalucistas) sin adscripción a partido alguno y, en bastante buena medida, sin ánimo de que lo suyo se transformase en nacionalismo. Su promotor era (y sigue siendo) uno de los ciudadanos más activos e implicados en el progreso de Andalucía, Paco Casero, quien, al cabo de los años, ha vuelto a protagonizar hace poco una huelga de hambre para llamar la atención sobre la necesidad de actuar y la desidia y falta de interés de demasiada gente. Y no sólo de responsables públicos, aunque sobre todo de ellos.

Marzo 2014

ANDALUCIA, SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Este documento es una actualización y reescritura del que aprobó en Mayo de 1996 la Asamblea Civil por Andalucía con la misma denominación para servir de base a un encuentro con otras organizaciones sociales celebrado en Julio de ese mismo año en Setenil (Cádiz). El presente texto es responsabilidad, exclusivamente, de sus firmantes.

Septiembre de 1997

El final de siglo está configurando a nivel mundial un nuevo entorno político, económico y social, con realidades que ya se venían perfilando en los años anteriores y con otras que se están presentando de forma más clara en los últimos años, en las que Andalucía debe insertarse de una manera definida si no quiere continuar siendo un país con poco o nulo peso en el contexto de España. Estas nuevas realidades, unas con perspectivas a corto plazo y otras que reflejan tendencias históricas y, por tanto, con procesos de plasmación más lentos, pueden determinarse en tres niveles del entorno en el que nos situamos, España, Europa y la Tierra en su conjunto.

En España, este nuevo contexto viene determinado por la alianza entre las fuerzas del centro-derecha, tanto político como social, que se plasma, por un lado, en el gobierno estatal del PP sostenido parlamentariamente por los partidos nacionalistas de centro de varias comunidades autónomas, entre ellas las más ricas; en segundo lugar por el incremento de la influencia en el Gobierno de los sectores sociales más favorecidos, que imponen en él la adopción de políticas económicas menos solidarias. En Europa, por la ampliación de la unidad europea, tanto a nuevos países como a mayores contenidos. Finalmente, en el mundo por dos procesos que se iniciaron hace decenios y se profundizan en los últimos años: la revolución de las nuevas tecnologías de producción y la integración de la economía a escala planetaria.

El entorno español

El gobierno de España del PP, apoyado por los partidos nacionalistas de centro-derecha de otras comunidades, parece estar profundizando en el proceso autonómico de manera desigual, lo que se traduce en el aumento de las actuaciones públicas y el incremento de las competencias transferidas en las comunidades gobernadas por los partidos que le apoyan. Esto, unido al recorte en el aspecto de la solidaridad interterritorial que supuso el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, va a poner fín a un periodo histórico en el que Andalucía, después de mucho tiempo, había recibido inversiones públicas en porcentaje similar (o tal vez algo mayor) al que representa en territorio y población en el conjunto de España. Pero, a nivel formal, el nuevo sistema tiene una buena coartada: la mayor independencia financiera de los ejecutivos de las comunidades autónomas debe traducirse en una mejor identificación por parte de los ciudadanos de la forma en que se aplican los recursos públicos por parte de cada administración, lo que debe traducirse --en una sociedad suficientemente informada y articulada-- en el castigo electoral a quiénes no actúan conforme a los intereses de los ciudadanos.

Si en este sentido la profundización del proceso autonómico puede resultar positiva para todos los que aspiramos a mayores cotas de autogobierno, por otra parte hará que los recursos que cada comunidad autónoma reciba del Estado en el futuro estén más ligados a la riqueza que tiene en la actualidad, lo que reducirá el componente de solidaridad interterritorial. La tendencia a reducir este capítulo de la financiación autonómica se viene observando desde las primeras reformas del sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero los acuerdos de gobierno entre el PP y los nacionalistas de CiU, PNV y CC la están reforzando como una lógica de la filosofía capitalista: prioridad a las inversiones más rentables en términos exclusivamente económicos, aportación de recursos allí donde las potencialidades de beneficios sean más rápidas y estén más a la vista, apoyo a la gran empresa, etc.

Es poco probable que haya una vuelta atrás en esta tendencia. Por un lado, porque la configuración política que parece asentada (con dos grandes partidos de centro-derecha y centro-izquierda estatales, una izquierda poco proclive a colaborar con el que tiene más cerca sino todo lo contrario, y dos grandes fuerzas nacionalistas de derecha, cuyo apoyo se hace vital para acceder al gobierno de España) no lo hace previsible. Por otro, porque es difícil convencer a los ciudadanos de otras comunidades de que es preciso insistir en las políticas de solidaridad interterritorial, debido a una lectura parcial que se ha hecho sobre el periodo de fuertes inversiones públicas y transferencias de recursos a Andalucía: que no hemos sabido aprovecharlas porque las hemos gestionado mal y no se han planificado adecuadamente. Sin entrar en la discusión sobre lo acertado o no de estas lecturas interesadas (porque otras zonas de España, por vías diferentes, han recibido recursos en cuantía similar o superior a Andalucía), la verdad es que han creado la idea en muchos sectores de otras comunidades autónomas del Estado español de que hay que limitar las políticas de solidaridad.

El entorno europeo

En el entorno europeo, el proceso de integración parece no tener vuelta atrás, aunque la falta de una explicación clara de sus grandes objetivos estratégicos y de las etapas precisas para culminar felizmente todo el proceso, así como las dificultades de armonizar intereses entre los sectores sociales nacionales en un momento histórico en el que la crisis económica puede afectar con mayor dureza a Europa que a los otros sistemas del mundo capitalista (Estados Unidos, Japón, los países emergentes, etc) está haciendo que aumenten sus críticos y quiénes pretendan modificaciones de objetivos difíciles de asumir por los sectores sociales dirigentes del proceso.

Por lo que afecta a Andalucía, la posible incorporación de nuevos países --como los del antiguo bloque del "socialismo real"-- está suponiendo la llegada de competidores con ventajas sobre nosotros, por su mayor cercanía al motor económico que representa Alemania, su similar desarrollo tecnológico y su más bajo nivel de vida y exigencias salariales, lo que les convertirá en lugar preferente de atracción de inversiones. Son, también, competidores en la captación de los fondos europeos que tienen como objetivo la cohesión interterritorial, al tiempo que, reduciendo la media europea, pueden colocarnos en una situación intermedia en el nivel de desarrollo europeo. Las dificultades financieras en los países motores del desarrollo están haciendo que surjan ya las exigencias de reducir los fondos destinados a

las políticas de solidaridad e, incluso, su eliminación para quiénes formen parte de la primera etapa de la convergencia.

El otro proceso de profundización en la unidad, el aumento de la convergencia interior, en líneas generales, puede tener efectos también negativos contra nuestras posibilidades de crear un tejido productivo capaz de competir con los demás países europeos, ya que, como estamos viendo con el goteo continuo de venta de empresas de capital privado español y andaluz a otras empresas europeas, la integración supone dependencia de las economías más dinámicas, sin que podamos valernos de la ventaja competitiva de los costes de producción, que, en muchos casos, son superiores a los de países más desarrollados debido a que disponen de tecnologías más avanzadas, mayores recursos y mejores posibilidades y flexibilidad para adaptarse a los cambios productivos.

El entorno mundial

En cuanto a la incidencia de las nuevas tendencias en el mundo, la tesitura actual no augura precisamente que los próximos años vayan a ser fáciles. La cada vez mayor integración económica del planeta y el poder creciente de la economía especulativa, los mercados financieros y las grandes corporaciones multinacionales hacen muy difíciles las políticas económicas que busquen un lugar propio, al tiempo que destinan al fracaso aquellas que van contracorriente de esas grandes tendencias mundiales. Especial sentido tiene esto cuando hablamos de territorios, como Andalucía, con economía débil y dependiente de las grandes empresas de ámbito exterior a ella. A destacar también que esos cambios suponen, para los gobiernos, una menor capacidad de incidencia de sus políticas económicas y una mayor sujeción a los mercados monetarios internacionales.

La revolución tecnológica en marcha (que ya se denomina “tercera revolución industrial”) supondrá una reducción considerable de los puestos de trabajo existentes a nivel mundial, pero mucho más fuerte en los países desarrollados e intermedios, caso de España y Andalucía, que profundizará las diferencias sociales entre quienes poseen empleo y quiénes no lo tienen, especialmente aquellos sectores que tienen más dificultades para adaptarse a las nuevas formas de trabajo. La globalización y la nueva revolución tecnológica tendrá como beneficiarios, además de las grandes corporaciones multinacionales, los pequeños núcleos de capitalistas locales de los países en vías de desarrollo que se liguen a los capitales internacionales y, en menor medida, algunos sectores de trabajadores de los países en vías de desarrollo, que accederán a la condición de asalariados con condiciones de trabajo peores que en los países desarrollados pero mejores que las actuales. Esto provocará un reajuste, a nivel mundial (téngase en cuenta que la media del desarrollo mundial está muy por debajo del nivel de Andalucía), en el que la solidaridad se verá sometida a contradicciones, como ya ocurre, por ejemplo, en la contraposición de los intereses agrarios y pesqueros andaluces con los marroquíes.

La búsqueda de un lugar en el concierto económico internacional, para Andalucía, presenta dificultades añadidas. El partir de una situación de desventaja, tener escasa capacidad de ahorro, la poca tradición en invertir en el exterior --que, además, está mal vista por la población andaluza, en cuento que sustrae recursos a las propias necesidades de nuestra tierra-- y el haber perdido atractivo para el mercado de capitales nos dejan en una disyuntiva entre Guatemala y Guatepeor: si no nos plegamos a las directrices de quiénes marcan las condiciones quedamos fuera del circuito de

generación de riqueza y, consecuentemente, el nivel de paro aumentará; es decir, la disyuntiva está entre más explotación o más paro.

¿Es posible una alternativa real?

No es posible vislumbrar una salida solidaria y justa a esta situación a medio y corto plazo, que, además, convenga a los intereses andaluces. Es evidente que esta situación caótica e injusta, especialmente en el plano mundial, tiene un culpable claro, el sistema capitalista, que provoca desarrollo desigual y, al mismo tiempo, una dinámica histórica en la que es ese desarrollo desigual el motor del crecimiento económico general. El problema se centra en que ese crecimiento general no se distribuye con la mínima racionalidad que permita atender los problemas más agudos del planeta (hambrunas, desastres sanitarios crónicos, destrucción de hábitats especiales por incompatibilidad con el desarrollo tal y como se configura desde el capitalismo más desaprensivo, desempleo masivo, etc) y que quiénes podrían verse favorecidos por esa mejor distribución (poblaciones de los países menos desarrollados, trabajadores de menor cualificación en los países intermedios, etc) no tienen ni la capacidad ni la unidad de objetivos a corto plazo necesarios para que les permitan conformar una estrategia a largo plazo y una fuerza conjunta que imponga sus criterios, habida cuenta de que son la inmensa mayoría de la población mundial.

En el escenario internacional, sería preciso combinar el objetivo de crear contrapoderes de orígen político democrático al actual poder económico de los mercados libres y desregulados, contrapoderes que no se asentasen sobre el dominio de los actuales grandes Estados (¿una ONU no controlada por los "fundadores"?) con el establecimiento de reglas de funcionamiento de esos contrapoderes que no supusiesen la entrada por otra vía de la arbitrariedad en las políticas a aplicar; es decir, que manteniendo la racionalidad económica como base de la atribución de los recursos, incorporase a esa racionalidad el convencimiento de que es necesario evitar las grandes diferencias entre los sectores sociales como una garantía de que todos nos sentimos parte de una colectividad.

Con esas expectativas de futuro, la capacidad de maniobra de una comunidad intermedia como Andalucía es muy escasa, si no nula. Antes sería preciso definir el objetivo de la salida que se ofreciera, el marco mundial en el que se pretende articular. La globalización no solo es imparable sino que, en una lógica que no es la que actualmente la sostiene, sería deseable para eliminar los vestigios de diferencias en función de nacionalidades, razas, culturas, etc. En cuanto al marco europeo, la Unión Monetaria es positiva si se plantea como la forma de consolidar una sociedad que, con sus defectos, es la más justa que hoy puede encontrarse en el mundo, gracias a una lucha social que hoy es cuestionada por el neoliberalismo económico. Respecto a España, la nueva configuración autonómica podría ser aceptable si con ella se terminan las reivindicaciones económicas a expensas de supuestos derechos históricos y se articula de manera estable el sistema de solidaridad interterritorial.

La experiencia reciente de reivindicación por encima de todo, de insistencia en las cuestiones de solidaridad, de exigencia de discriminación positiva, basadas en la peor situación económica de Andalucía puede considerarse negativa y, tal y como hemos expuesto anteriormente, no va a ser fácil ni que sea comprendida por la ciudadanía del resto de Comunidades Autónomas. Es preciso, pués, cambiar las bases de nuestro discurso, haciendo más hincapié en las condiciones internas y en las

características propias sobre las que se ha asentado nuestra incapacidad para acceder a mayores cotas de desarrollo, articulándolo con el discurso derivado del hecho de que el nivel de desarrollo medio mundial es muy inferior al de Andalucía, lo que nos obliga a ser solidarios con los países en vías de desarrollo.

Pero un cambio de discurso debe responder a un cambio de actitud ante la realidad, de la que muchas veces estimamos que solo negándola (o mostrándole nuestra antipatía o descalificándola moralmente) podemos cambiarla. Nuestra posición en el concierto de los pueblos nos obliga a aceptar la realidad tal y como se presenta y, en todo caso, buscando su transformación mediante la doble adecuación de nuestras actuaciones a sus parámetros de funcionamiento y, por otro lado, a criterios de Justicia y Equidad. Los cambios precisos para ello parten de analizar y recomponer nuestros hábitos más profundos ante la realidad y las materias que verdaderamente inciden en la dirección que llevan las cuestiones sociales, como el mundo de la producción, la tecnología, la articulación de la sociedad y sus relaciones con los poderes, el análisis de las nuevas ideas sociales y económicas, etc. Se trata de comprender cuáles han sido nuestras carencias históricas y procurar ponerles remedio, dentro de un proceso que podríamos llamar de Renacimiento andaluz para el siglo XXI.

Los andaluces tenemos una sociedad muy poco emprendedora, con escaso entramado de organización civil y estamos acostumbrados a hacer descansar en diversas instancias (partidos políticos, administraciones, grupos de presión, etc) responsabilidades que son de todos, como participar en la vida pública de una manera activa, crear un tejido activo que dinamice la sociedad y se convierta en la "materia gris" que nos haga avanzar en la comprensión de los cambios históricos, crear tejido productivo, etc. Como preferimos hacer descansar muchas responsabilidades sociales en una administración redentora y todopoderosa, impedimos (y rechazamos como negativa) la iniciativa empresarial, en el sentido más amplio y mejor de la palabra; no valoramos suficientemente las cosas hechas con profesionalidad y seriedad; despreciamos las cuestiones técnicas, lo que es un hándicap para la gestión de las cosas, tanto públicas como privadas, etc.

Finalmente, nuestro escaso sentido de formar parte de una unidad --tanto en lo político como en lo social y en la vida cotidiana-- se lleva hasta extremos y actitudes más viscerales que en otros países, lo que contribuye a hacer poco grata y difícil cualquier actividad social y pública. Afrontar estas características con ánimo de superarlas (al menos, en una primera etapa, en los grupos dirigentes de los sectores sociales más dinámicos) es condición inexcusable para resolver una cierta desconexión con la dinámica global en esta etapa de auténtica transformación de la sociedad, cuyos parámetros no comprendemos bién y que nos puede dejar, de manera definitiva, en "la cuneta de la Historia".

Los andaluces hemos definido en los últimos años una nacionalidad no excluyente que no pretende basarse en el agravio comparativo con otras comunidades. Debemos aprender la letra de nuestro himno y saber que lo que tengamos que ser lo seremos sólo por nosotros mismos. De ahí que uno de los pasos a dar sea definir nuestro papel en el equilibrio interterritorial de España, un papel que debe estar acorde a nuestra significación en lo humano, económico y cultural. El Estatuto de Autonomía y las instituciones andaluzas han supuesto un paso de gigante en la búsqueda de nuestra identidad como pueblo, pero ahora debemos avanzar para definir nuestra actuación hacia el desarrollo,

no solo de Andalucía sino del mundo hacia el que inexorablemente nos dirigen fuerzas que, hasta ahora, hemos considerado hostiles, pero que son inevitables.